

## Opacidad en las universidades

# Los rectores aún no aplican el control de las cuentas pactado hace tres años

► Las instituciones académicas siguen sin implantar un sistema de contabilidad homogéneo para conocer y comparar cómo gastan sus fondos

MANUEL TRILLO  
MADRID

Las cuentas de las universidades públicas siguen sin salir a la luz. El sistema de contabilidad analítica, acordado hace tres años para poder comparar la eficiencia de cada una, todavía no se ha terminado de implantar.

El caso del político Íñigo de Errejón, que cobraba más de 1.800 euros al mes por una investigación en la Universidad de Málaga en la que apenas trabajó, ha puesto de nuevo el foco en las cuentas universitarias. Sin embargo, los cerca de 285.000 euros para ese proyecto es tan sólo una gota en el océano. En total, el medio centenar de universidades públicas españolas manejan más de 9.000 millones de presupuesto, según los últimos datos disponibles, de 2012, sin que exista aún un sistema homogéneo que permita un seguimiento de ese dinero y comparar la gestión que se hace de él en cada una.

En 2011, al final de la última legislatura socialista, se acordó poner en marcha un modelo común de contabilidad analítica que vendría a paliar esa falta de control, euro a euro y departamento a departamento. El modelo CANOA (Contabilidad Analítica Normalizada para Organizaciones Administrativas), por el que se apostó, establecía pautas para reflejar desde el coste de personal hasta el teléfono y las fotocopias.

### Decisión con amplio respaldo

La decisión se ratificó de forma unánime por los rectores en el Consejo de Universidades, así como por una amplia mayoría de las comunidades y por los consejos sociales de las universidades. Se fijó un plazo de 18 meses para la entrada en vigor del sistema, con lo que debería haber estado listo en el curso 2012-13. Sin embargo, a menos de un mes de entrar en 2015, el grado de implantación es desigual y el sistema común aún no es una realidad.

El catedrático Màrius Rubiralta, secretario general de Educación hasta enero de 2012, fue el principal impulsor de aquella iniciativa, de la que se siente particularmente orgulloso. La idea surgió a raíz de que el Ministerio de Economía advirtiera que, para evaluar la fi-

nanciación de las universidades y plantearse si era eficiente, «no había un sistema unitario y los números no eran comparables», recuerda para ABC.

«Hay que rendir cuentas y dar elementos suficientes para que se pueda demostrar que la universidad es eficiente», asegura convencido. La complejidad de la universidad radica en que es

un organismo «multifuncional» y «no es fácil atribuir un gasto a una actividad concreta», apunta. Por ejemplo, se pregunta, cuando se prende la luz, «¿dónde se contabiliza la luz, en la labor docente o a la investigadora? ¿se financia de fondos públicos o privados? En una empresa no hay problema, porque lo incorpora a la factura final».

De hecho, con la contabilidad analítica se trataba de «demostrar que el sistema de ciencia no estaba bien financiado, ya que los costes indirectos no estaban bien contabilizados». Con todo, Rubiralta asegura que el control «ha mejorado muchísimo» y «los gerentes han hecho un cambio en los últimos seis o siete años», por lo que niega que haya «falta de transparencia» en el sistema universitario. «Una cosa es el control y otra el funcionamiento homogéneo de las universidades», matiza.

El secretario ejecutivo de la Mesa de Gerentes de la Conferencia de Rectores

**El acuerdo de 2011**  
Rectores y comunidades apoyaron una contabilidad analítica que permitiera supervisar cada euro

**Fuera de plazo**  
El sistema debería estar listo en 18 meses, pero buena parte de las universidades aún no lo han desarrollado

(CRUE) y gerente de la Universidad de Valencia, Joan Oltra, explica que «el proceso de implantación tiene varias fases, que están siendo supervisadas por el Ministerio de Educación y la Intervención General del Estado (IGAE)» y que «actualmente la mayoría de las universidades se encuentran en la fase de evaluación e implantación». En este sentido, «algunas ya han implantado y explotado la información y todas han iniciado el proceso», subraya.

Oltra defiende el compromiso de las universidades con la transparencia e indica que la existencia de contratos programa o de sistemas de financiación basada en resultados docentes y de investigación es «una práctica generalizada». En la actualidad, señala, las cuentas anuales son aprobadas por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social y se remiten a las comunidades con un informe previo de auditoría externa. Luego distintos órganos de control externo las auditan de nuevo, además de otras auditorías específicas y de la fiscalización del Tribunal de Cuentas y de su homónimo de la Unión Europea.

### Resistencia al cambio

Pero no todos en la comunidad universitaria están de acuerdo. El rector de la Universidad Carlos III, Daniel Peña, achaca la lentitud en la puesta en marcha del sistema contable a que los propios responsables universitarios son «conservadores» y se resisten a los cambios. A su juicio, la implantación «no es tan difícil, se podía haber resuelto en



### Proyectos bajo la lupa tras el «caso Errejón»

## Andalucía destina 1,7 millones a investigaciones sobre la bici

FERNANDO DEL VALLE MÁLAGA

Desde Madrid, y enfrascado en su actividad en la dirección de Podemos, resultaba complicado que el profesor Íñigo Errejón pudiera dedicarse a contar viviendas vacías en Andalucía. Menos dedicándole 40 horas semanales, como obligaba el polémico contrato de la Universidad de Málaga que le hizo su «jefe», el economista —también de Podemos— Alberto Montero. Como consecuencia, la Universidad de Málaga ha abierto a ambos expediente disciplinario y ha suspendido de empleo y sueldo —sólo doce días— a Errejón.

El revuelo generado pone la lupa sobre los 23 millones de euros que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en manos de IU, destina a través de fondos europeos a proyectos de investigación en diferentes universidades andaluzas.

El proyecto de Alberto Montero y Errejón, dotado con 284.604 euros y titulado «La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda», se enmarca en la convocatoria de proyectos 2013-2014. Once millones de euros esparcidos por

**Cuentas de la universidad pública Personal Docente e Investigador universitario (PDI)**

Obligaciones reconocidas netas. Año 2012		Curso 2012-2013			
En euros		Total	% Mujeres	Total ETC*	Plantilla ≥ 60 años
Gastos de personal	5.542.587.389,11	<b>101.299</b>	<b>38,8</b>	<b>74.884,8</b>	<b>13,9</b>
Gastos en bienes corrientes y servicios	1.334.874.076,90	48.423	35,2	47.584,3	20,4
Gastos financieros	62.883.702,07	10.906	20,3	10.730,7	39,9
Transferencias corrientes	347.893.107,19	30.015	39,7	29.499,9	13,1
Inversiones reales	1.630.116.700,50	1.157	29,2	1.145,0	33,8
Transferencias de capital	21.508.498,35	6.182	40,9	6.047,3	19,1
Activos financieros	7.598.906,42	163	34,4	161,4	22,1
Pasivos financieros	174.252.210,59	684	25,0	446,3	100,0
<b>Total</b>	<b>9.121.714.591,13</b>	<b>115.332</b>	<b>39,3</b>	<b>83.214,2</b>	<b>13,0</b>

FUENTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

(\*) Equivalente a Tiempo Completo

ABC

“**Apuesta por la transparencia**”

**Màrius Rubiralta**

EX SECRETARIO GRAL. DE EDUCACIÓN

«Hay que rendir cuentas y dar elementos suficientes para que se pueda demostrar que la universidad es eficiente»

**Joan Oltra**

CONFERENCIA DE RECTORES

«Actualmente, la mayoría de las universidades se encuentra en la fase de evaluación e implantación del sistema de contabilidad analítica»

**Daniel Peña**

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III

«En las universidades españolas somos conservadores. El nuevo sistema se podría haber implantado la nueva contabilidad en seis meses»

**Joaquín Moya-Angeler**

PTE. CONF. DE CONSEJOS SOCIALES

«La contabilidad analítica permitiría saber cómo se usa el dinero en cada universidad, cuánto ha gastado y a qué se ha destinado»



**El político e «investigador» Íñigo Errejón**

seis meses». Sin embargo, «como no hay consecuencias por no hacerlo, no cambia nada y las universidades no se matan por implantarlo». Con todo, opina que no hace falta una contabilidad analítica para que las universidades se financien en función de sus resultados o saber, por ejemplo, «si hay que cerrar una titulación que tiene pocos estudiantes».

El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades, Joaquín Moya-Angeler, considera que la implantación de una contabilidad analítica «permitiría saber cómo se usa el dinero» en cada una y, en el caso de los grupos de investigación, se podría saber «cuánto ha gastado y a qué se ha destinado». A su juicio, es imprescindible la transparencia en las cuentas y que se pue-

da comparar la eficiencia entre unas universidades y otras. Se trata de «un tema central, en el que el Ministerio debería poner más énfasis», opina el representante de los consejos sociales, que son los órganos de enlace entre las universidades y la sociedad.

«En una empresa, se habría implantado en cuatro meses, pero en la universidad llevamos años», lamenta.

Entre tanto, desde el Ministerio de Educación se defiende que la financiación y la gobernanza son pilares básicos de las reformas necesarias en la universidad. Fuentes del departamento que dirige José Ignacio Wert reconocen que falta transparencia en las cuentas de las instituciones académicas y que se debería poner en marcha la contabilidad analítica que se acordó. «Pero una cosa es el acuerdo y otra la voluntad de aplicarla», apuntan.

ÁNGEL NAVARRETE

diferentes departamentos de los centros universitarios en los que, en general, se apuesta por iniciativas muy del cuño de las políticas «fetiche» de la consejera de IU, Elena Cortés. Términos como la «no ciudad», «movilidad sostenible», «democracia radical» o «soberanía alimentaria del barrio» trufan los títulos y las memorias —por lo general bastante escuetas, con una media de unos seis folios— de los trabajos ahora en ejecución.

En el listado de proyectos admitidos hay investigaciones sobre dragados en puertos, normas sísmicas, eficiencia energética, iluminación inteligente en carreteras y otra que propone llenar de hostales los centros históricos de las ciudades. Pero si hay una estrella, ésta es sin duda la bicicleta. En esta última convocatoria de proyectos de I+D+I se asignan 1,7 millones de eu-

ros a investigar sobre el transporte a pedales. Cifra que se amplía hasta los dos millones en el global de inversión de estudios subvencionados, según la propia Cortés.

Los proyectos aprobados con relación a la bici los realizan la Universidad de Sevilla (tres), la Pablo de Olavide (dos) y otro la de Cádiz y la de Córdoba. El que recibe una mayor dotación, cifrada en 436.568 euros, es uno que persigue «la creación de una plataforma de información sobre vías verdes de Andalucía», a cargo de la Universidad de Sevilla. Le sigue otro, de la Pablo de Olavide, titulado «Movilidad sostenible en Andalucía. Prácticas y Discursos en el Uso de la Bicicleta», que entre los resultados que propone, según su memoria, está la «relación de discursos sociales en función de diferentes posiciones sociales

en Andalucía sobre el transporte sostenible y el ciclismo urbano». Se lleva 358.841 euros. Otros proyectos, como el de Córdoba, intentan detectar puntos negros de inseguridad en vías ciclistas, reducir el deslizamiento y lograr superficies más seguras.

**Vaporetos en el Guadalquivir**

Y la Universidad de Sevilla también propone, en el proyecto que menos cantidad se lleva (49.379 euros) un peculiar sistema de transporte por el Guadalquivir. En una sucinta memoria de apenas tres folios, propone el estudio de una línea pública de lo que denomina «vaporetos de tecnología híbrida» para «resolver los problemas de movilidad en el eje Norte-Sur» de la capital sevillana. Una línea que debería estar conectada «sobretudo» (sic) con la bicicleta.

La adscripción de los investigadores a organizaciones de izquierda no es exclusiva de Íñigo Errejón y Alberto Montero. Al líder de Equo Andalucía, Esteban de Manuel, profesor titular de la Universidad de Sevilla, se le adjudican 112.918 euros para el proyecto «Barrios en transición». En este proyecto también participa Itziar Aguirre, que fue «número dos» de la misma formación en las pasadas elecciones generales. De Manuel y la dirección de Equo han defendido, en un escrito enviado a ABC, la concurrencia competitiva con que fue seleccionado su proyecto y rechazan que se den por afinidades políticas. Pero también aparecen, entre los profesores agradecidos con generosas subvenciones, participantes de listas electorales de IU y habituales de conferencias y charlas de sindicatos como el SAT.